

Declaración institucional en defensa de la viabilidad de las fábricas gallegas de producción de aluminio primario

Dentro de la UE, el mayor productor de aluminio es España, con una capacidad de producción de más de medio millón de toneladas por año, de las que más de 320 mil se producen en Galicia.

El precio final del aluminio se fija en la Bolsa de Metales de Londres (LME), el mismo que el de buena parte de las materias primas procedentes del petróleo (Coque, Brea..), de tal manera que, a las empresas productoras de Aluminio, solo les queda el precio de la energía eléctrica para mantener el equilibrio en la rentabilidad del proceso.

La energía eléctrica supone aproximadamente el 45% del coste del proceso de producción del Aluminio primario; para fabricar una tonelada de aluminio hacen falta 15.500 Kwh, más de cuatro veces del que se necesita para fabricar una tonelada de Zinc, y treinta veces más del que se necesita para fabricar una tonelada de acero. Los países productores del norte de Europa - que resultan ser nuestros competidores - tienen regulado las tarifas eléctricas de una manera muy competitivo, ligando el precio a la evolución del LME y con contratos de suministro de hasta 40 años.

En los países industrializados y de la UE, todos los gobiernos mantienen sistemas que hacen llegar la energía eléctrica a su industria en condiciones ventajosas. Una máxima de estas políticas es la de fomentar acuerdos, a medio y largo plazo, entre la industria gran consumidora de energía eléctrica y las empresas energéticas (20, 30, 40 años), para dotarlas así de estabilidad y competitividad, consiguiendo que puedan elaborar grandes proyectos e inversiones.

Los últimos años en España se está viviendo una situación de completa inestabilidad, en lo que se refiere al precio de la energía, tanto para los particulares como para las industrias grandes consumidoras, especialmente, para las del Aluminio. Cada poco tiempo se están realizando reformas en el sector eléctrico, que, lo único que consiguen, es una escalada de 80% en el precio en los últimos diez años. Pasamos de ser uno de los países con la energía eléctrica más barata, a uno de los más caros, y, de seguir con esta dinámica, en pocos años, España será un desierto industrial, ya que nuestra industria está buscando nuevos emplazamientos que les aseguren su viabilidad.

En el año 2012, ante de la amenaza de Alcoa de cerrar las factorías en España de aluminio primario, el Ministerio de Industria puso en marcha el mecanismo de "Interrumpibilidad" para los grandes consumidores, en el que se pagaba 35 €/MW, dotado de un presupuesto de 750 millones de euros, que fue capaz de frenar por un tiempo la deslocalización de las factorías.

La interrumpibilidad es un sistema por el que los centros de trabajo declarados como grandes consumidores de electricidad, tienen que comprometerse a poner todo su consumo, o parte de él, al servicio del regulador (REE) en un momento dado, para que éste pueda equilibrar la demanda y la oferta de electricidad en la red. Por esa disposición, el regulador paga un precio por cada MW que se consume en el centro de trabajo.

En el año 2014 el Ministerio modificó este sistema, incluyendo una subasta en bloques de potencia, de 90 y de 5 megavatios, rebajando el presupuesto a 550

millones de euros, subasta que ha perjudicado especialmente a las fábricas de aluminio primario, dadas sus características especiales como gran consumidor, ya que era imposible competir contra industrias que podían tirar muy a la baja los precios por el "mucho menor" impacto que los costes eléctricos tienen en su proceso productivo. Esta subasta estuvo a punto de provocar el cierre de nuestra fábrica y la de Avilés, y dejó mal parada a la factoría de San Cibrao, que solo pudo obtener tres bloques de 90 megavatios, de los cuatro que necesita para operar con normalidad.

A finales del mes de agosto, principios de septiembre del año 2015, se realizó de nuevo la subasta para adjudicar los incentivos por el servicio de interrumpibilidad para el año 2016, quedando de nuevo demostrado la gran contradicción de este sistema, donde el más grande consumidor de electricidad del país, era quien se quedaba sin los bloques de 90 megavatios (los más bonificados), a pesar de demandar seis de los ocho bloques que se sacaron a la subasta.

El pasado 23 de mayo, despertamos con la noticia de que Alcoa ponía en venta las fábricas de aluminio primario de España, poniendo así mucha más incertidumbre en nuestro futuro como planta, y dejando en el aire el futuro de todo el sector.

Esta es a consecuencia de la perversidad del sistema eléctrico actual, y la falta de de una política industrial adecuada que tantos años llevamos denunciando.

Mientras en otros países se crean escenarios energéticos a largo plazo para la industria, en España la subasta genera mucha inestabilidad en las empresas grandes consumidoras al no tener la certeza de cuales van a ser sus costes eléctricos más allá de un año. De este modo, es difícil que puedan acometer las inversiones necesarias, que puedan elaborar sus presupuestos para el año siguiente, y se arriesgan a perder cartera de clientes por no poder cerrar pedidos. De seguir con este sistema, en menos de cinco años, la gran industria de nuestro país desaparecerá.

Por todo lo expuesto, la Corporación de la Diputación Provincial de A Coruña expresa todo su apoyo a las fábricas gallegas de producción de aluminio primario, exigiendo un proyecto industrial, y las inversiones precisas, que garanticen la competitividad y viabilidad, especialmente, de las factorías de Alcoa de la ciudad de A Coruña y de San Cibrao.